

CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 2005

ORDEN DEL DIA N° 1627

Impreso el día 20 de diciembre de 2005

SUMARIO

COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el año 2006. (CD-64/05)

DICTAMEN DE LA COMISION

Honorable Senado

Vuestra Comisión de PRESUPUESTO Y HACIENDA ha considerado el PROYECTO DE LEY de PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, registrado bajo el número CD-64/05 y fe de errata CD-65/05; y, por las razones que en el fundamento se citan y se acompañan, se aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del H. Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del Día.

Sala de la Comisión, 20 de diciembre de 2005.-

Jorge M. Capitanich.- José M. Mayans – Maurice F. Closs – Cristina Fernández de Kirchner - Marcelo E. López Arias.- Guillermo R. Jeneffes.- Marcelo A. H. Guinle - Celso A. Jaque -

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Visto el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2006, esta Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo:

I. OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, poniendo de manifiesto su carácter de herramienta fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la gestión que el Gobierno prevé desarrollar como de su empleo como instrumento de política económica y social.

El presente Proyecto de Ley ha sido remitido por el PODER EJECUTIVO sobre la base de lo establecido por el artículo 75, inciso 8, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, referido a la atribución al PODER LEGISLATIVO de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la citada Constitución que asigna al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS la responsabilidad de enviar al Congreso el Proyecto de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

En el contenido del Mensaje de remisión N° 597/05 se reseña sucintamente el contexto económico global en el que se inserta el Proyecto de Presupuesto para el año 2006, las políticas presupuestarias para ese año, las características del Presupuesto de la Administración Nacional, analizando tanto sus recursos como sus gastos desde el punto de vista económico y el destino por finalidad y función de las erogaciones, el presupuesto de los otros Entes del Sector Público Nacional, el comportamiento del Presupuesto Consolidado del Sector Público y, finalmente, una síntesis de la información necesaria para el análisis del Proyecto.

El proyecto de ley refleja el contexto macroeconómico con

una significativa mejora de la actividad económica a partir de mediados de 2002, acentuada y continuada en 2003, 2004 y 2005 y el crecimiento de los ingresos públicos, particularmente tributarios, como consecuencia de la evolución económica mencionada y de una mejor administración tributaria.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de realizar un esfuerzo de asignación selectiva de los gastos primarios, preservando los programas sociales y dando máxima prioridad y, en consecuencia, reforzando los gastos destinados a educación, ciencia y tecnología, infraestructura económica y social y aquellos que contribuyen a mejorar la distribución del ingreso, como ser salarios y jubilaciones y pensiones, manteniendo el resultado primario superavitario.

Por lo tanto, se procura consolidar una situación de solvencia fiscal sustentable que garantice el logro de los objetivos de la acción del gobierno y exprese la prioridad asignada al prudente manejo de las finanzas públicas y su empleo para garantizar el logro de una situación económica y financiera estabilizada, sobre la cual asentar un crecimiento sostenido.

Para el año 2006 se busca el uso adecuado de los recursos públicos necesarios para cumplir con los objetivos del Estado, continuando con una política de gasto público compatible con el control del resultado fiscal. La recaudación de los ingresos públicos, que ha sido programada en relación al desenvolvimiento esperado de la actividad económica y a una administración tributaria orientada a combatir a los evasores de obligaciones impositivas, permitirá también atender en buena medida los servicios de la deuda pública reestructurada.

El esfuerzo de una administración ordenada en el uso de los recursos públicos será una clara señal para los agentes económicos de la sustentabilidad que se busca en materia fiscal en línea con la Ley N° 25.917 (Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal). Sobre esas bases se determinó un nivel del gasto consistente con los recursos previstos y el resultado primario superavitario deseado.

Por otra parte, las proyecciones presupuestarias hacen posible tener un horizonte fiscal predecible, necesario para la toma de decisiones, tanto de los operadores económicos en general, como de los administradores del Sector Público en particular. Por tal razón, y de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 25.152, ratificada por la Ley N° 25.917, se hace necesaria la confección del presupuesto trianual para los años 2006 – 2008.

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS

El presente proyecto de ley ha sido remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Mensaje 597 de fecha 12 de septiembre de 2005, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la atribución del Poder Legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la citada Constitución que establece que el Proyecto de Presupuesto Nacional debe ser enviado al Congreso previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 75 CN: “Corresponde al Congreso: ...8) Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.

Artículo 100 CN: “...Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: ...6) Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo”.

El proyecto de ley respeta las disposiciones establecidas por La Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional N° 24.156 referidas a la estructura que la Ley de Presupuesto debe observar (Ley N° 24.156, Capítulo II, Sección I, Artículos 19 a 23).

El Poder Ejecutivo nacional presentó el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación el 15 de septiembre de 2005, acompañado del Mensaje 597 en el que se expresan los objetivos que se propone alcanzar, las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, los lineamientos generales considerados para la formulación del presupuesto y otros elementos de juicio estimados como oportunos para el análisis del mismo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 24.156.

El proyecto de ley en análisis contempla un presupuesto plurianual para el trienio 2006-2008 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, inciso e) de la Ley 25.152 y el artículo 6º de la misma ley, permitiendo tener un horizonte predecible de mediano plazo.

III. CONTEXTO ECONOMICO GLOBAL

En lo que va de 2005, la economía argentina ha continuado creciendo a un ritmo elevado, aunque convergiendo paulatinamente a una tasa de crecimiento sostenible de mediano y largo plazo. El proceso de normalización y recuperación económica, por tanto, ha dado lugar a una fase de consolidación. El crecimiento del PIB ya ha ingresado en su cuarto año consecutivo, desde los mínimos niveles de actividad alcanzados a comienzos de 2002 como consecuencia de las crisis “trillizas” (financiera, cambiaria y fiscal) que condujeron al colapso del régimen de convertibilidad.

En este proceso que muestra la economía desde 2002, se asiste a la estabilización de la situación financiera, la recuperación de la actividad y el empleo, la reanudación del proceso inversor, la reaparición del crédito y el cierre exitoso del proceso de reestructuración de la deuda del gobierno y el retorno del sector público a los mercados voluntarios de crédito.

A diferencia de otras fases de recuperación cíclica, luego de más de tres años de crecimiento, y merced a un marco de política económica consistente, las principales variables macroeconómicas se encuentran razonablemente alineadas y los equilibrios básicos alcanzados en los planos externo, fiscal, monetario y cambiario brindan fundamentos macroeconómicos sólidos para la continuidad del proceso de expansión en curso.

Luego de la finalización exitosa del proceso de reestructuración de

deuda, la actual fase de consolidación del crecimiento sostenido confronta tres desafíos fundamentales: (a) preservar la estabilidad de precios, (b) sostener la competitividad de la producción doméstica y, a partir de éstos, (c) continuar y acelerar el proceso de recuperación de la difícil situación social.

El año en curso tuvo un comienzo auspicioso con la exitosa culminación del proceso de reestructuración de la deuda pública. Además de apuntalar expectativas para la evolución económica del presente ejercicio, el ordenamiento financiero de las cuentas fiscales permitirá un crecimiento sostenido de mediano plazo, fundamentalmente porque los nuevos compromisos asumidos guardan estricta relación con la capacidad de pago futura de la economía.

Del total de deuda elegible por U\$S 81.836 millones, (U\$S 102.566 millones si se incluyen los intereses atrasados) se aceptó el 76,15% (U\$S 62.318 millones) de la propuesta efectuada por el gobierno, con lo que Argentina dejó formalmente su situación de default luego de un arduo e inédito proceso de negociación debido a su magnitud y complejidad.

De cara al futuro, y en la medida en que el principal logro de la reestructuración consistió en la reformulación de los compromisos de deuda de acuerdo a la real capacidad de pago de la economía, puede afirmarse que la economía argentina enfrenta ahora una carga de la deuda muy exigente pero, a diferencia del pasado, afrontable. Aunque se sitúa todavía en valores muy elevados, el nivel y el perfil de la deuda pública han vuelto a ser manejables. De hecho la relación deuda/PIB representa ahora un 72% del producto. Como consecuencia, la carga de intereses que se desprende del nuevo perfil de deuda alcanza actualmente el 2% del PIB.

Todo ello implica que el servicio de la deuda pública, aunque demandará sostenidos esfuerzos fiscales a lo largo de un período muy prolongado, debería dejar de operar como factor generador de fragilidad sistémica e inductor de permanente incertidumbre, inhibiendo el crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo.

La reestructuración encarada permite avanzar en la recuperación de la solvencia fiscal intertemporal y en la progresiva reducción de la carga de la deuda. El reordenamiento de las finanzas públicas y la definición de un panorama fiscal sostenible deberían inducir, *ceteris paribus*, una mayor rentabilidad proyectada y un escenario de mayor previsibilidad para el sector privado. Por un lado, las menores necesidades de financiamiento del sector público deberían traducirse en una mayor disponibilidad de fondos domésticos para ese sector,

evitando los tradicionales efectos de “desplazamiento” provocados por la necesidad de financiamiento del sector público en los mercados de crédito, al tiempo que la reducción de la prima de riesgo país debería posibilitar una disminución de los costos de financiamiento de los proyectos privados en los mercados internacionales.

Al despejar el horizonte y eliminar un factor de incertidumbre, la resolución exitosa de la reestructuración de la deuda ha tenido un impacto favorable sobre las expectativas, contribuyendo a reforzar los fundamentos de la actual configuración macroeconómica, y a mejorar las perspectivas de un crecimiento sostenible, balanceado regionalmente y socialmente inclusivo.

La economía argentina ha pasado de las etapas de “normalización” y “recuperación” a la etapa de un claro “crecimiento”. Crecimiento que se refleja no sólo en el nivel del PIB sino también en un marcado cambio de composición en favor de: la producción de bienes transables internacionalmente, un uso más intensivo del factor trabajo con el consiguiente efecto favorable en materia de creación de empleo, una mejor distribución funcional del ingreso, y un más amplio impacto territorial.

El desafío central es ahora consolidar y profundizar estas tendencias, lo cual requiere llevar adelante un conjunto de políticas que pueden resumirse en: a) mantener las políticas de solvencia fiscal que han creado una situación única en los últimos 50 años de la economía argentina y aportando independencia en la formulación de la política económica; b) aumentar la inversión y la productividad, pues si bien la tasa de incorporación de capital medida en términos corrientes se encuentra en niveles altos, en varias oportunidades el Gobierno Nacional ha señalado la importancia de incrementar las inversiones en relación al PIB en no menos de 2 a 2,5 puntos porcentuales adicionales; c) llevar adelante una firme política anti inflacionaria con instrumentos fiscales, monetarios y de política de ingresos definida en el contexto del cambio de precios relativos que aún están pendientes luego de los efectos del derrumbe del año 2001; d) el aumento en el poder de compra de la población, con especial acento en los sectores que más sufrieron los impactos de políticas económicas previa; e) preservar el "círculo virtuoso" de producción-productividad-empleo-consumo. El consumo ha jugado un papel central en el proceso de recuperación primero, y de crecimiento luego. Y ello es, por supuesto, resultado del aumento del poder de compra derivado de la combinación de mayor empleo-mayores horas trabajadas y mejores salarios.

En este frente el papel del Estado es asegurar, coordinar, una expansión conjunta de productividad, utilidades e inversiones y

consumo e ingreso mejor distribuido. Es eso lo que garantiza la existencia del círculo virtuoso y asegura que decisiones que individualmente son racionales, por ejemplo retener como utilidades todos los aumentos de productividad, no se conviertan en una trampa de estancamiento en términos sociales. Sólo una distribución equitativa garantiza la continuidad del crecimiento.

En este marco de políticas es esencial la relación entre el tipo de cambio y la productividad. Las experiencias de la “tablita cambiaria” (1976-81) y de la convertibilidad (1991-2001), fueron funestas para la integración del aparato productivo y ocupacional argentino y están en el origen del proceso de pérdida de la clase media y del empobrecimiento generalizado de la sociedad.

Mientras aún en los países desarrollados se devaluaban las monedas nacionales y otro tanto ocurría en mercados emergentes como México, Rusia, Sudeste Asiático y Brasil, la rigidez argentina descolocaba a la producción y al empleo local.

Finalmente, el Presupuesto incluye políticas destinadas a consolidar lo logrado en materia de reestructuración de la deuda. Para un país cuyo endeudamiento (1976-2001) evolucionó de manera exponencial, el ser capaces de comenzar a bajar la deuda era absolutamente central.

Eso es lo que se logró con la renegociación de la deuda y con el pago a los Organismos Financieros Internacionales. El resultado ha sido que de entre el 8 y 10 % del PIB que debía pagarse o refinanciarse cada año por servicios de intereses de la deuda, se haya entrado en un modelo donde están previstos pagos por menos del 3 % del PIB.

El crecimiento y las políticas por inversión y empleo están hoy siendo alentadas por un conjunto de instrumentos que están incluidas en el Presupuesto del año 2006. a) El instrumento fiscal incluye: los regímenes de devolución anticipada del IVA sobre bienes de capital, la amortización acelerada de la inversión, la devolución del IVA Técnico con destino a la inversión, el pago con igual destino del Plan Canje Automotor adeudado desde fines de la década pasada, varios regímenes sectoriales, como la ya aprobada Ley de Promoción del Software, y los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso Nacional en materia de biotecnologías y biocombustibles, b) El

instrumento financiero incluye: subsidios federalizados de tasas de interés, cambio en los programas con el BID y el BIRF pasando de programas de ajuste a programas de inversión, la incorporación de la Nación como accionista a la Corporación Andina de Fomento, la amplia refinanciación de deudas acordada por la AFIP a través del RAFA y del RAFA Plus, las refinanciaciones del Banco Nación Argentina al Sector Agropecuario, y recientemente la creación de la Unidad de Financiamiento al Desarrollo con participación de diversas Secretarías de Estado, el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), para coordinar el financiamiento de mediano y largo plazo, c) Los instrumentos relativos a los marcos legales incluyen: la redefinición del Régimen de Iniciativa Privada, y la creación del Régimen de Asociación Público Privada, d) El instrumento de la incorporación de tecnología de avanzada abarca: la creación de los Programas de Nanotecnología, el apoyo a los Programas Satelitales del INVAP con la NASA y con Italia, el Programa Nacional de Desarrollo de Radars, la recuperación de parte de la industria aeronáutica, y la generalización de instrumentos destinados a cerrar la “brecha digital” por medio de los programas informatización masivos y con destino específico a las PYMES, e) Conjuntamente con estas políticas el Presupuesto refleja, además, modificaciones en lo que puede definirse como marco estructural de largo plazo para lo cual se cuenta con: la ley recientemente sancionada de Escuelas Técnicas, el proyecto de ley elevado a ese Honorable Congreso de la Nación por el cual se propone pasar de 4 a 6 % del PIB la participación de la educación, la ciencia y la tecnología en los Presupuestos Nacional y de las Provincias.

IV. PROYECCIONES ECONOMICAS

Considerando el contexto económico, internacional y nacional, y los objetivos de la política de gobierno antes señalados se han considerado las siguientes proyecciones macroeconómicas para la estimación de recursos:

PROYECCIONES MACROECONOMICAS

	PIB	Consumo	Inversión	Exportaciones	Importaciones
2004 Millones de \$ corrientes	447.644	331.015	85.800	113.063	81.324
Variaciones reales (%)	9,0%	8,3%	34,4%	8,1%	40,1%
Variaciones nominales (%)	19,1%	18,0%	50,8%	20,4%	52,3%
Variación (%) Precios implícitos	9,2%	8,9%	12,2%	11,4%	8,7%
2005 Millones de \$ corrientes	525.331	391.772	110.562	127.117	100.668
Variaciones reales (%)	7,3%	6,4%	18,0%	14,0%	19,0%
Variaciones nominales (%)	17,4%	18,4%	28,9%	12,4%	23,8%
Variación (%) Precios implícitos	9,4%	11,2%	9,2%	-1,4%	4,0%
2006 Millones de \$ corrientes	593.974	441.453	127.976	138.401	113.103
Variaciones reales (%)	4,0%	3,5%	7,9%	4,2%	10,2%
Variaciones nominales (%)	13,1%	12,7%	15,8%	8,9%	12,4%
Variación (%) Precios implícitos	8,7%	8,9%	7,3%	4,5%	2,0%
2007 Millones de \$ corrientes	658.426	492.763	142.602	151.557	127.743
Variaciones reales (%)	3,5%	3,7%	4,8%	4,9%	8,9%
Variaciones nominales (%)	10,9%	11,6%	11,4%	9,5%	12,9%
Variación (%) Precios implícitos	7,1%	7,6%	6,4%	4,3%	3,7%
2008 Millones de \$ corrientes	729.180	548.249	158.579	166.399	143.295
Variaciones reales (%)	3,5%	3,7%	4,4%	4,2%	6,9%
Variaciones nominales (%)	10,7%	11,3%	11,2%	9,8%	12,2%
Variación (%) Precios implícitos	7,0%	7,3%	6,5%	5,4%	5,0%

V. POLITICAS PRESUPUESTARIAS

Política tributaria – Estimación de recursos

El Gobierno Nacional viene desarrollando una política tributaria, de acuerdo a objetivos previamente definidos, que se encuentra dirigida a:

- I. eliminar gradualmente alteraciones en el sistema económico generadas por la aplicación de algunos tributos,
- II. tender a la transparencia y simplificación del sistema tributario en la medida que la complejidad de las normas de cada tributo así lo permita,
- III. mejorar la equidad distributiva del sistema tributario,
- IV. generar nuevos recursos de carácter genuino para financiar el gasto público.

La recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social alcanzará en el año 2006 los 133.148,2 millones de pesos, por lo que será 11,8% superior a la estimada para el año 2005. En términos del PIB llegará a 22,42%, un porcentaje levemente inferior al esperado para el año 2005.

El crecimiento proyectado en la recaudación nominal se explica, principalmente, por los aumentos proyectados en la actividad económica, el comercio exterior, los precios, el empleo y las remuneraciones. También incidirá en forma positiva la continuidad en la mejora del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Los recursos provenientes del impuesto a las Ganancias llegarán en el año 2006 a los \$29.751,5 millones, lo que significará un incremento de 9,5% respecto del año anterior. En términos del PIB la recaudación registrará una leve disminución, pasando de 5,17% a 5,01%. La variación de los ingresos se explica por los crecimientos esperados en la actividad económica, el nivel de precios y las remuneraciones, que se reflejarán en aumentos en los impuestos determinados tanto por las sociedades como por las personas físicas y en mayores ingresos provenientes de las retenciones y percepciones practicadas en este impuesto. En sentido contrario incidirán la postergación de los vencimientos de los anticipos de las sociedades y de las personas físicas y de las retenciones sobre sueldos correspondientes al mes de diciembre de 2004 -que favoreció la recaudación del año 2005- y el mayor impacto negativo que tendrá sobre los ingresos de este gravamen el régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos destinados a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura (Ley N° 25.924).

La recaudación del impuesto al Valor Agregado, neta de reintegros a las exportaciones, se incrementará 11,6% respecto del año 2005, alcanzando los \$38.269,6 millones. En términos del PIB, la recaudación alcanzará el 6,44%. Los aumentos en la actividad económica, las importaciones y los precios son las principales razones de la variación de la recaudación. Por otro lado, en el año 2006 el ya mencionado régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos y el de devolución de saldos técnicos por compras de bienes de capital (Ley N° 25.988) tendrán un mayor efecto negativo en la recaudación de este impuesto.

Los recursos originados en los impuestos Internos Coparticipados serán de \$3.921,2 millones, aumentando 8,6% con respecto al año 2005. Las

variaciones esperadas en las ventas de los productos gravados explican este incremento.

Los ingresos por el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta disminuirán 3,6%, llegando su recaudación a los \$1.028,6 millones. La caída de los recursos se debe, fundamentalmente, al aumento en el cómputo como pago a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente.

La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales crecerá 7,7%, por lo que alcanzará a \$1.926,8. Este aumento se explica por el efecto combinado del incremento de los precios de determinados activos y el mantenimiento del monto exento.

Los ingresos estimados por el impuesto sobre la Naftas serán de \$1.748,5 millones, lo que significará un alza de 2,1% respecto del año 2005. La recaudación del impuesto sobre el Gas Oil y otros combustibles presentará un incremento de 7,9%. En ambos casos, las variaciones serán consecuencia de los aumentos proyectados en las ventas.

Los ingresos provenientes de los impuestos que gravan el comercio exterior -Derechos de Importación y Exportación y Tasa de Estadística- llegarán a \$19.411,6 millones, monto que será 16,1% superior al obtenido en el año 2005. Los incrementos estimados en las exportaciones, las importaciones y el tipo de cambio nominal son las principales causas de esta suba.

La recaudación del impuesto sobre los Créditos y Débitos alcanzará a \$10.413,8 millones, registrando un alza de 12,2% con relación a la del año anterior, que reflejará, básicamente, la variación nominal de la actividad económica.

Las Contribuciones a la Seguridad Social llegarán a \$20.728,7 millones, por lo que crecerán 15,6%. El aumento de los ingresos por este concepto se explica por los incrementos esperados tanto en los salarios nominales imponible como en el número de cotizantes efectivos. También incidirá en forma positiva la vigencia plena de la eliminación del límite máximo para el cálculo de las Contribuciones Patronales.

Gestión de la deuda pública y política de financiamiento

El objetivo central de la gestión de la deuda pública y la política de financiamiento del Estado Nacional para el 2006 es continuar con el restablecimiento del crédito público afectado por la crisis desatada a partir del año 2001, siendo ello necesario para el crecimiento de la actividad económica en general y la atención de los vencimientos de la deuda de los próximos años, al tiempo que le facilitará al sector privado el acceso a los recursos necesarios para sus actividades productivas.

Para el logro de dicho objetivo es fundamental la normalización de los pagos de la deuda. En este sentido, se ha llevado a cabo un proceso de reestructuración de la deuda instrumentada en títulos públicos que ha finalizado en junio de 2005, con un nivel de aceptación de un 76% de los acreedores y con elevados valores en la mayoría de las plazas financieras mundiales; se ha logrado reducir el stock de la deuda en U\$S 67.305 millones, pasando de U\$S 102.566 millones en diciembre de 2004 (stock de deuda elegible e intereses devengados y no pagados a partir del 31 de diciembre de 2001 por U\$S 81.836 millones y U\$S 20.730 millones, respectivamente) a U\$S 35.261 millones, que es el monto total emitido de deuda nueva (valor nominal al 31 de diciembre de 2003). Ésta se ha distribuido en Bonos Par por U\$S 15.000 millones, bonos Descuento por U\$S 11.932 millones y bonos Cuasi-Par por U\$S 8.329 millones.

Esta operación permite compatibilizar el costo de los servicios de la deuda con las reales posibilidades de pago, en un contexto de crecimiento económico -algo que se ve reflejado en un ratio de servicios de intereses sobre el PBI de 2% y sobre exportaciones de 9%- al mejorar el perfil de vencimientos y disminuir, consecuentemente, la vulnerabilidad frente a shocks externos. Estas mismas consideraciones han sido resaltadas por las agencias calificadoras de crédito como efectos positivos que el canje ha tenido para la sustentabilidad económica del país.

La política de financiamiento para el año 2006 estará sustentada en el superávit primario así como en la profundización de las operaciones de crédito en el mercado doméstico iniciadas durante 2005 a los fines de cumplir con los compromisos por vencer dentro del período, fundamentalmente Bodenes, Préstamos Garantizados y la nueva deuda reestructurada. Asimismo, se continuará percibiendo financiamiento del Banco Central.

En lo que respecta a la relación con los organismos internacionales de crédito y las entidades que participan en operaciones crediticias bilaterales, la

política apunta a fortalecer la presencia argentina en los mismos y aumentar la inserción de nuestro país, tanto a nivel interregional como regional, con el objeto de mantener un marco favorable en la negociación del financiamiento de programas y proyectos. En la relación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y entidades financieras bilaterales, se priorizará la reactivación productiva del sistema económico, el financiamiento de los sectores sociales y la inversión en infraestructura básica.

Se dará continuidad a la modalidad de préstamos directos a provincias y a la política de mejorar la eficiencia fiscal en esta materia en la relación Nación-Provincias, dando prioridad a los proyectos de infraestructura de integración regional, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

Gasto público

El Proyecto en análisis asigna recursos a conceptos del gasto que contribuyan a la protección social (subsidios por desempleo, planes alimentarios, entrega de medicamentos, etc.) es contraproducente hacerlo en desmedro de otras categorías de gastos claves en el desarrollo económico y social, pero buscando mantener un balance entre la asignación para gastos sociales y para otros destinos, como por ejemplo, la infraestructura, la educación, la ciencia y tecnología (inversión en capital físico y humano y conocimiento), que inciden positivamente sobre el crecimiento económico sostenible a largo plazo que, por ende, redundará en una reducción permanente de la pobreza. En el plano internacional, existe cierto grado de consenso en que los gastos en investigación y desarrollo, educación e inversión en infraestructura son más productivos que otros.

En continuidad con las prioridades de gasto público asignadas en los últimos tres años, las previsiones presupuestarias para 2006 contemplan los gastos destinados a educación, ciencia y tecnología; infraestructura económica y social; y a mejorar la distribución del ingreso, como ser salarios y jubilaciones y pensiones.

No obstante, es importante considerar que la priorización de gastos no puede ignorar la restricción financiera que imponen las pautas fiscales para permitir una evolución sustentable de las finanzas públicas: un significativo superávit primario del orden del 3% del PIB y un resultado financiero también

superavitario, con una regularización de la atención de los servicios de la deuda.

Coordinación Fiscal con las Provincias

El consolidado del sector público provincial verifica en el ejercicio 2004 y en la estimación realizada para el año 2005, resultados financieros superavitarios afianzando la buena performance observada en 2003.

En el año 2004, concluidos el Programa de Unificación Monetaria y la reprogramación de la deuda tanto provincial como municipal, se consolidó un contexto favorable para el desarrollo de políticas fiscales y financieras tendientes a ordenar, sanear y transparentar las cuentas públicas; materializadas a través de dos instrumentos: la continuidad del Programa de Financiamiento Ordenado y la aprobación de un cuerpo de medidas tendientes a establecer reglas generales de comportamiento fiscal y obtener una mayor transparencia en la gestión pública.

En 2004, la meta fiscal consolidada de las dieciocho provincias firmantes del Programa de Financiamiento Ordenado registró un cambio cualitativo respecto de los programas anteriores, dado que entre los compromisos asumidos, el de ejecutar un superávit fue cumplido, alcanzando la ejecución un resultado financiero positivo de \$ 3.635 millones.

Impulsado por estos resultados, en un contexto favorable de permanente crecimiento del nivel de actividad económica y de la recaudación impositiva nacional y provincial, el consolidado de las 24 jurisdicciones provinciales arrojó un superávit primario del 1,3% del PIB, que en términos nominales equivale a \$ 5.843 millones.

Las nuevas condiciones alcanzadas por las finanzas provinciales resultaron propicias para que a mediados del año 2004 el Gobierno Nacional elevara al Congreso de la Nación un proyecto con medidas de responsabilidad fiscal, que fue convertido en Ley N° 25.917, creándose el primer Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. En diciembre de 2004 el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 1.731 reglamentó dicha Ley con vigencia a partir del 1 de enero de 2005.

El objetivo del mencionado Régimen es la consolidación del marco de ordenamiento fiscal y financiero, en el cual deberán desenvolverse la totalidad de las relaciones intergubernamentales, homogeneizando las reglas de juego para todos y cada uno de los partícipes, introduciendo pautas macrofiscales que provean sustentabilidad y previsibilidad a la política fiscal y orientando al gasto de modo que contribuya al crecimiento económico, priorizando, en este contexto, las acciones de inversión pública destinadas a reducir los déficit en materia de infraestructura básica social y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Asimismo, con dicha norma legal se posibilitará el consenso de las políticas fiscales que permitan disminuir paulatinamente el nivel de endeudamiento, así como la promoción de la transparencia y de una mejor gestión de los recursos financieros y reales del sector público.

La adhesión de las provincias a la Ley N° 25.917 es relevante ya que, finalizado el primer semestre de 2005, alcanzó a diecinueve jurisdicciones (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuyos gastos representan casi el 90% del total de egresos del consolidado provincial del año 2004.

En las provincias adheridas, sus normativas pusieron en marcha una modalidad de implementación peculiar del Régimen en el ámbito Municipal. Ello le da una amplitud de matices de manera tal que en algunas provincias éstos quedan obligados al cumplimiento del mismo, en tanto que en otras se hace una invitación de adhesión voluntaria, existiendo casos en donde se crea un Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal.

Dando continuidad a la política de asistencia del Gobierno Nacional a las jurisdicciones provinciales, el artículo 26 de la Ley N° 25.917 autoriza la implementación de programas de financiamiento para atender exclusivamente los vencimientos de capital de deuda, con aquellas provincias que presenten dificultades financieras, dejando de lado los demás aspectos contemplados en los programas anteriores (déficit de caja, atrasos). Finalizando el mes de junio de 2005, once de ellas han suscripto Convenios Bilaterales en el marco de este Programa.

En cuanto al objetivo de disminuir paulatinamente el nivel de endeudamiento, el Capítulo V de la Ley N° 25.917 establece la necesidad de adecuar el perfil de la deuda, tomando las jurisdicciones las medidas necesarias para que sus servicios de la deuda no superen el 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios (indicador de endeudamiento). Adicionalmente, se establece que cada gobierno subnacional, para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, deberá remitir la documentación y antecedentes al Ministerio de Economía y Producción de la Nación, el que deberá efectuar un análisis a fin de autorizar tales operaciones.

El Gobierno Nacional, asimismo, para contribuir a que las provincias puedan alcanzar una menor carga financiera derivada del endeudamiento, ha resuelto asistir técnicamente a aquellas jurisdicciones que han iniciado procesos de reestructuración de deudas con las entidades financieras con el objetivo de

colaborar en las acciones encaradas para mejorar el perfil de los vencimientos de intereses y amortizaciones en los próximos ejercicios fiscales.

Otro de los aspectos centrales del Régimen es el hecho de que la Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, está integrado tanto por la Nación como por las provincias que adhieran al mismo, asegurando el consenso, la acción articulada y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el fortalecimiento del desarrollo del federalismo. En el 2005 se ha definido su Reglamento Interno, se ha elegido sus autoridades y las del Comité Ejecutivo y se ha comenzado a desarrollar distintas actividades para dar cumplimiento a los postulados de la Ley.

La Ley N° 25.917 también ha previsto, con una visión abarcadora de los aspectos centrales que inciden en la situación fiscal y financiera del sector público en su conjunto, un capítulo para abordar la resolución de deudas y acreencias pendientes. En dicho marco, y considerando los artículos 16 y 17 de la Ley N° 25.967 de Presupuesto Nacional para el año 2005, el Gobierno Nacional tiene por delante la compleja tarea de instrumentar un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del Régimen, de manera tal que se logre un saneamiento definitivo de la situación financiera entre ambos niveles de gobierno.

El Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales (PFO), destinado a los Estados Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementado a través del Decreto No 2263/2002, a fin de comprender tanto el déficit de la jurisdicción así como la atención de compromisos de su deuda. En tal sentido, el Estado Nacional, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, asistió mediante el citado programa a las jurisdicciones provinciales que lo solicitaron, a través del otorgamiento de un préstamo sujeto al cumplimiento de determinadas metas fiscales por jurisdicción.

Para el ejercicio 2006 el Presupuesto de este Fondo incluye las operaciones financieras relacionadas con el canje de deuda provincial, destacándose el cumplimiento de los servicios correspondientes a los bonos garantizados a través de los cuales se instrumentó el mencionado canje.

Asimismo, se han proyectado los vencimientos de los servicios correspondientes a los Programas de Financiamiento Ordenado de los años 2002, 2003, 2004 así como los correspondientes al Programa de Asistencia Financiera 2005, por lo que se ha previsto el cobro a las provincias tanto de los servicios de renta como de capital.

A su vez, se contemplan las devoluciones al Tesoro Nacional por los

mismos conceptos. Finalmente, se ha considerado el otorgamiento de nuevos préstamos destinados a aquellas jurisdicciones que participen del Programa de Asistencia Financiera 2006.

El artículo 55 fija los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, durante el ejercicio, a las Provincias que se determinan seguidamente en concepto de pago de obligaciones generadas por el artículo 11 del Acuerdo Nación – Provincia, sobre Relaciones Financieras y Bases para un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27 de febrero de 2002 ratificado por Ley 25.570 y que corresponde con el TRECE POR CIENTO (13%) a la garantía de coparticipación federal de impuestos establecida en el Compromiso Federal ratificado por Ley 25.400 y sus addendas complementarias: a la PROVINCIA DE LA PAMPA, TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS (\$ 3.369.100); a la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$ 3.380.000); a la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 6.795.000); a la PROVINCIA DE SANTA FE, CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO PESOS (\$ 14.970.100) y a la PROVINCIA DE SAN LUIS, CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 4.031.300).

El programa de Atención a Ex Cajas Previsionales Provinciales, en la Jurisdicción de la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL contempla una partida presupuestaria de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 2.174.600.000), destinado a cubrir los déficit de las cajas previsionales de las siguientes provincias: Catamarca (\$ 381.152.611), Jujuy (\$ 155.150.779), La Rioja (\$ 212.047.184), Mendoza (\$ 244.706.615), Río Negro (\$ 177.680.102), Salta (\$ 175.414.099), San Juan (\$ 217.591.407), San Luis (\$ 78.588.571), Santiago del Estero (\$ 226.316.270) y Tucumán (305.952.362).

Bajo el escenario citado y como resultado de estos esfuerzos se estima alcanzar una normalización plena de la situación del endeudamiento provincial y la consolidación del saldo positivo del superávit primario.

VI. PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Recursos

Los recursos totales (\$ 101.141,90 millones) están compuestos en un 98,9% por ingresos corrientes (\$ 100.036,10), los que aumentan un 12,2% respecto del año 2005. El resto de los recursos (1,1%) corresponde a los de capital, cuyo monto global (\$ 1.102,80) disminuye un -8,5% con respecto al año 2005.

Los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social constituyen la mayor parte de los recursos corrientes; ambos representan el 94,9% del total. Siguen en orden de importancia los recursos no tributarios y las rentas de la propiedad, que significan, respectivamente, un 2,2 % y un 1,3% del total. El resto de los recursos corrientes (1,6%) corresponde a las ventas de bienes y servicios y transferencias corrientes.

RECURSOS CORRIENTES

En millones de pesos

Concepto	2005	(%)	2006	(%)	Var. (%)
Ingresos Tributarios	69.822,5	78,3	77.970,5	77,9	11,7
Contrib. a la Seg. Social	14.779,0	16,6	16.979,2	17,0	14,9
Ingresos No Tributarios	2.032,3	2,3	2.233,2	2,2	9,9
Vta. De Bs. y Serv. de Adm. Púb.	520,0	0,6	564,9	0,6	8,6
Rentas de la Propiedad	1.231,3	1,4	1.400,0	1,3	13,7
Transferencias Corrientes	772,8	0,8	891,2	1,0	15,3
TOTAL	89.157,9	100,0	100.039,0	100,0	12,2

Gastos

Los gastos totales previstos en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2006 ascienden a \$ 93.702,4 millones, registrándose un incremento del 12,0 % respecto del año anterior. La composición de los gastos corresponde en un 86,70% a gastos corrientes y en un 13,30% a gastos de capital.

De las erogaciones totales, se destacan las correspondientes a la Administración Central con el 57,3 % y las de las Instituciones de Seguridad Social con el 36,3 %. El 6,4 % restante corresponde al gasto proyectado de los Organismos Descentralizados.

La composición del gasto, según el clasificador económico y el objeto del gasto, es el siguiente:

En millones de pesos

CONCEPTO	2005	%	2006	%	Var. (%)
Gastos de Consumo	14.114,6	19,0	16.009,7	19,7	13,4
Rentas de la Propiedad	10.225,5	13,7	10.413,9	12,8	1,8
Prestaciones de la Seguridad Social	25.494,7	34,3	28.768,0	35,4	12,8
Otros Gastos Corrientes	439,2	0,6	3,7	0,1	-99,2
Transferencias Corrientes	24.093,8	32,4	26.033,9	32,0	8,1
TOTAL GASTOS CORRIENTES	74.367,9	100,0	81.229,2	100,0	9,2
TOTAL GASTOS CAPITAL	9.292,10	100,0	12.473,20	100,0	34,2

Dentro de los gastos de consumo de la Administración Nacional, las remuneraciones explican el 67,7% de los mismos, el 13,4 % de los gastos corrientes proyectados y el 11,6 % del gasto total. El nivel total por este concepto prevé para el 2006 financiar los niveles salariales vigentes incluyendo variaciones vinculadas con el régimen de funciones ejecutivas u otras coberturas en el marco del SINAPA y del resto de los regímenes laborales de la Administración Nacional y el efecto anualizado de aumentos otorgados en 2005.

El total de gastos por rentas de la propiedad alcanza a \$ 10.413,9 millones de los cuales el 99,7 % corresponde a intereses de la deuda pública, los que para el ejercicio 2006 representan el 1,75 % del producto bruto interno, y un aumento respecto de 2005 del 1,7 %.

Las prestaciones de la Seguridad Social abarcan el universo del gasto previsional, en jubilaciones, pensiones y retiros, para el cual se prevén \$28.768 millones en el ejercicio 2006. El incremento en el gasto prestacional se explica, principalmente, por el efecto anualizado del aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas dispuesto por el Decreto N° 748 del 30 de junio de 2005, que eleva desde el 1º de julio de 2005, el haber mínimo jubilatorio y de pensión a \$350, y por la asignación, desde el 1º de setiembre, de un complemento mensual que lleva dicho haber a \$390. Ambas medidas alcanzan aproximadamente a 2.500.000 beneficios, incluidos los jubilados y pensionados del Sistema Integrado de Jubilaciones y

Pensiones, las ex – Cajas Provinciales transferidas a la Nación, las Pensiones No Contributivas y los Veteranos de la Guerra de Malvinas.

A su vez, se prevén aumentos derivados de la aplicación de la Ley Nº 25.994 que crea la jubilación anticipada, del Decreto Nº 137, de fecha 21 de febrero de 2005, que establece un suplemento destinado a abonar a los docentes la diferencia entre el haber otorgado por el régimen general y el establecido en la Ley Nº 24.016, por el cual se fija la jubilación para el régimen previsional de los docentes en el 82% del último sueldo percibido; así como también se incluye el efecto del Decreto Nº 160, del 25 febrero de 2005, por el cual se crea el suplemento "Régimen Especial para Investigadores Científicos y Tecnológicos", a fin de abonar una jubilación equivalente al 82% del sueldo a los investigadores científicos y tecnológicos de acuerdo a la Ley Nº 22.929.

El monto previsto para el total de las transferencias que financian gastos corrientes de los sectores privado, público y externo, asciende a \$ 26.033,9 millones, es decir, el 27.8 % del total de gastos.

El incremento en las transferencias obedece, principalmente, a las destinadas a Provincias, producto de la atención de los déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación y a los planes Federales de Viviendas.

La estructura de los gastos de capital es la que se expone en el siguiente cuadro:

GASTOS DE CAPITAL					
En millones de pesos					
CONCEPTO	2005	%	2006	%	Var. (%)
Inversión Real Directa	2.846,3	30.6	4.092,8	32.8	43,8
Transferencias de Capital	5.136,2	55.3	6.637,8	53.2	29,2
Inversión Financiera	1.309,6	14,1	1.742,6	14.0	33,1
TOTAL:	9.292.1	100,0	12,473.2	100.0	34,2

En el cuadro precedente puede observarse un incremento en el monto previsto de inversión real directa, cuyo nivel se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad.

Debe destacarse que las transferencias de capital previstas por el Estado Nacional tienen como destino la financiación de inversión real.

Gasto primario

El gasto primario de la Administración Pública Nacional (concepto que excluye de los gastos corrientes y de capital los correspondientes a Intereses de la Deuda y que permite concentrar la atención en aquellos gastos propios del año que reflejan las decisiones de política fiscal).

A continuación se presenta la evolución del gasto primario de la Administración Nacional. Para el ejercicio 2006 se prevé el mantenimiento de dicho gasto en términos del PIB con relación al proyectado para el ejercicio 2005 en el cual casi recuperó los niveles correspondientes a 2001.

GASTO PRIMARIO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
En porcentaje del PIB

CONCEPTO	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Gasto de la Administración Nacional	18.3	14.8	15.4	14.7	15.9	15,8
- Intereses de la deuda pública	4.0	2.1	1.9	1.3	1.9	1.8
Gasto Primario	14.3	12.7	13.5	13.4	14,0	14,0

Resultados

Los ingresos y gastos corrientes proyectados para el ejercicio 2006 arrojan un resultado económico o ahorro de \$ 18.809.9 millones, el que resulta mayor en un 27,2 % al estimado para el actual ejercicio.

El Superávit financiero de la Administración Nacional para el año 2006 alcanza a \$ 7.439.5, lo que implica un aumento de \$ 736 millones respecto al resultado esperado para el 2005, alcanzando los recursos a \$ 101.141,9 millones y los gastos corrientes y de capital a la suma de \$ 93.702,4 millones.

El resultado primario, resultado financiero sin contabilizar los intereses de la deuda, se estima para 2005 en \$ 16.915,5 millones y en \$ 17.824,7 millones para el 2006, lo que implica un incremento del 5,4 % en el superávit primario.

Fuentes y aplicaciones financieras

Las fuentes financieras, excluyendo los gastos figurativos, ascienden a \$ 59.733,9 millones en el 2006 y están destinadas a cubrir, junto con el superávit financiero, dos grandes conceptos: la inversión financiera y la amortización de la deuda.

El endeudamiento público (\$ 55.059,5 millones) tiene las siguientes formas de expresión: a) la colocación de títulos que se utilizan para la financiación del servicio de la deuda y el pago de deudas no financieras; b) préstamos de organismos internacionales, como el FMI, BID, BIRF y FONPLATA, orientados básicamente a la financiación del servicio de deuda, a financiar programas de gastos, y a ser represtados a las provincias; c) los convenios bilaterales, convenios de préstamos país - país y crédito de proveedores que financian una gama variada de gastos primarios (estos últimos son de escasa significación) y d) los anticipos del Banco Central de la República Argentina.

La disminución de la inversión financiera se encuentra fundamentalmente en la Administración Central (\$ 4.674,5 millones) y corresponde mayoritariamente a recupero de préstamos otorgados a provincias, organismos internacionales y otras cuentas a cobrar a largo plazo.

Para el 2006 las aplicaciones financieras, excluyendo los gastos figurativos, ascienden a \$ 67.173,4 millones. Dentro de ellas se encuentran la inversión financiera (\$ 9.205,6 millones) y la amortización de la deuda, siendo ésta la más significativa en monto (\$ 57.967,8 millones).

En cuanto a la amortización de la deuda, se destaca la amortización de deuda externa. Además, hay una importante atención

de deuda por varios conceptos: BODEN; Préstamos garantizados; proveedores y previsionales (BOCONES). Se incluyen, también, devoluciones de anticipos del B.C.R.A..

VII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO
ARGENTINO 2006

El presupuesto consolidado del Sector Público Argentino alcanza a la Administración Nacional, los subsectores: Fondos fiduciarios nacionales, Empresas públicas nacionales y otros Entes del Estado Nacional, distinguiéndose en estos últimos el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) y la Administración Federal de Ingresos Públicos y los consolidados de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por último, a las administraciones municipales.

El Presupuesto del Sector Público Nacional proyecta para el ejercicio fiscal 2006 un resultado financiero superavitario de \$8.188,2 millones (1,38% del PIB). Si a este resultado se le deduce el monto de los intereses de la deuda por \$11.160,8 millones, se obtiene un superávit primario de \$19.349,0 millones (3,26 puntos del PIB).

Sectorialmente, este último resultado se explica en un 92,1% por la Administración Nacional, un 3,8% en los Fondos Fiduciarios, un 3,5% en Otros Entes Públicos y el restante 0,6% en el consolidado público empresarial.

El cuadro que se presenta a continuación muestra la evolución del Sector Público Nacional no Financiero en la última década.

SECTOR PUBLICO NACIONAL

EVOLUCION DE LOS RESULTADOS

En porcentaje del PIB

Año	Resultado Primario	Resultado Financiero
1997	0,49	- 1,47
1998	0,47	- 1,77
1999	- 0,16	- 3,05
2000	1,27	- 2,14

2001	- 0,49	- 4,66
2002	1,88	- 0,29
2003	3,19	1,15
2004	3,89	2,60
2005	3,49	1,41
2006	3,26	1,38

VIII. CONCLUSION

El proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el 2006 responde al contexto macroeconómico externo e interno y persigue, en la proyección de ingresos y gastos, una política de crecimiento sustentable con equidad basada en la reducción de la volatilidad de la tasa de crecimiento, un política cambiaria consistente, una política fiscal autónoma con cuentas ordenadas, nueva naturaleza de la inversión y políticas de distribución del ingreso. Por lo demás, es preciso destacar que las jurisdicciones provinciales tienen una perspectiva de transferencia de recursos de jurisdicción nacional con 37133 M de pesos, lo cual implica un aumento extraordinario respecto a los 15500 M de pesos a valores corrientes del 2002. También el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) contiene un monto de 4600 M de pesos de financiamiento, y la Nación contempla las transferencias de aproximadamente 2000 M de pesos para el financiamiento de los sistemas provisionales no transferidos. Paralelamente, es preciso destacar el esfuerzo en inversión pública que aumenta de 3300 M de pesos en el ejercicio fiscal 2003 a más de 11000 M de pesos en el ejercicio fiscal 2006. El gasto social se ha mantenido en los niveles que permite morigerar los indicadores sociales adversos de pobreza e indigencia y las políticas fijadas por el Presidente de la Nación gozan de respaldo popular y sustentabilidad económica que inexorablemente son corroboradas por este dictamen, razones por las cuales se aconseja la aprobación del proyecto en consideración.

Jorge M. Capitanich.- Celso A. Jaque.-

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(15 de diciembre de 2005)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL

ARTICULO 1º.- Fíjanse en la suma de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS (\$ 93.702.411.314) los gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio de 2006, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.

FINALIDAD	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	TOTAL
Administración Gubernamental	5.678.599.577	396.166.639	6.074.766.216
Servicios de Defensa y Seguridad	6.540.008.641	251.997.212	6.792.005.853
Servicios Sociales	55.132.079.393	4.982.674.082	60.114.753.475
Servicios Económicos	3.232.607.026	6.842.369.744	10.074.976.770
Deuda Pública	10.645.909.000	-	10.645.909.000
TOTAL:	81.229.203.637	12.473.207.677	93.702.411.314

ARTICULO 2º.- Estímase en la suma de CIENTO UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 101.141.902.597) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Nacional de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla N° 8 anexa al presente artículo.

Recursos Corrientes	100.039.083.377
Recursos de Capital	1.102.819.220
TOTAL:	101.141.902.597

ARTICULO 3º.- Fíjanse en la suma de QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 15.915.495.882) los importes correspondientes a los Gastos Figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración Nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las planillas Nos. 9 y 10 anexas al presente artículo.

ARTICULO 4º.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º, el Resultado Financiero superavitario queda estimado en la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 7.439.491.283). Asimismo se indican a continuación las Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones Financieras que se detallan en las planillas Nos. 11, 12 y 13 anexas al presente artículo:

Fuentes de Financiamiento	59.733.922.793
- Disminución de la Inversión Financiera	4.674.457.550
- Endeudamiento Público e Incremento de otros pasivos	55.059.465.243
Aplicaciones Financieras	67.173.414.076
- Inversión Financiera	9.205.633.076
- Amortización de Deuda y Disminución de otros pasivos	57.967.781.000

Fijase en la suma de UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS (\$ 1.175.905.000) el importe correspondiente a Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el Financiamiento por Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras de la Administración Nacional en la misma suma.

ARTICULO 5º.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la presente ley a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes.

ARTICULO 6º.- No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo para cada Jurisdicción, Organismo Descentralizado e Institución de la Seguridad Social. Exceptúase de dicha limitación a las transferencias de cargos entre Jurisdicciones y/u Organismos Descentralizados y a los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el Decreto N° 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos dictaminados favorablemente y los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la Carrera del Investigador Científico-Tecnológico y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA.

Las excepciones previstas en el presente artículo serán aprobadas por decisión del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 7º.- Salvo decisión fundada del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las Decisiones Administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas. Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores de la Administración Pública Nacional, el Personal Científico y Técnico de los organismos indicados en el inciso a) del artículo 14 de la Ley Nº 25.467 los correspondientes a los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, así como los del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja durante el presente ejercicio.

CAPITULO II DE LA DELEGACION DE FACULTADES

ARTICULO 8º.- Autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte, con la condición de que su monto se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con Fuente de Financiamiento 22 – Crédito Externo.

ARTICULO 9º.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la Administración Central, de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de Entes del Sector Público Nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) al TESORO NACIONAL. Exceptúase de dicha contribución a los recursos con afectación específica destinados a las provincias, y a los originados en transferencias de Entes del Sector Público Nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y contribuciones, de

acuerdo con la definición que para éstas contiene el Clasificador de los Recursos por rubros del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

ARTICULO 10.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley con sujeción a los artículos 37 de la Ley Nº 24.156 y 15 de la Ley Nº 25.917. Asimismo, déjase establecido que el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá delegar las facultades conferidas por el presente artículo, en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios.

ARTICULO 11.- Las facultades otorgadas por la presente ley al señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrán ser asumidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.

CAPITULO III DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS

ARTICULO 12.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 24.156, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2006 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo.

Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para que, en oportunidad de proceder a la distribución de los créditos a que alude el artículo 5º, efectúe las compensaciones necesarias, dentro de la JURISDICCION 56 – MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS, incluido cambio de Finalidades, Fuentes de Financiamiento y Objeto del Gasto, al sólo efecto de atender la financiación de la ejecución de las obras detalladas hasta el subtotal UNO (1) de la Planilla Anexa al presente artículo de la citada Jurisdicción.

Para atender el financiamiento de la ejecución de las obras detalladas a continuación del mencionado subtotal UNO (1) y hasta el subtotal DOS (2) de la Planilla Anexa al presente artículo, facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a proceder a reasignar créditos por compensación de la Jurisdicción 56 – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, hasta la suma de

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA Y UN PESOS (\$ 343.200.061). Las citadas compensaciones deberán realizarse en todos los casos con sujeción a las disposiciones del artículo 37 de la Ley N° 24.156.

ARTICULO 13.- Fijase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las Universidades Nacionales la suma de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 3.318.042.854), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo.

Déjase establecido que dentro del monto citado anteriormente, la suma de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$413.928.736) provienen de rebajas en los créditos asignados a las jurisdicciones 70- Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y 91- Obligaciones a Cargo del Tesoro de acuerdo con el siguiente detalle.

Jurisdicción	70 - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
SAF	330- Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología
Programa	26 - Desarrollo de la Educación Superior
Actividad	11 - Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR).
Partidas	561–848 –Transferencias a Universidades para gastos corrientes – Universidades sin discriminar.
Moneda	1 - Nacional
Ubicación Geográfica	97 –Nacional
Fuente	11 - Tesoro Nacional
Finalidad-Función	34 – Educación y Cultura
Rebaja	\$ 163.928.736

Jurisdicción	91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro
SAF	356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro
Programa	99 – Otras Asistencias Financieras
Subprograma	05 - Financiamiento Educativo
Actividad	01 - Financiamiento Educativo
Partida	531 - Transferencias a la Adm. Central para financiar gastos corrientes
Moneda	1 - Nacional
Ubicación Geográfica	97 – Nacional
Fuente	11 - Tesoro Nacional
Finalidad-Función	34 - Educación y Cultura
Rebaja	\$ 250.000.000.-

Las Universidades Nacionales deberán presentar en tiempo y forma la información que requiera el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, a través de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS, necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los compromisos asumidos en los distintos Programas que

desarrolle la citada Secretaría. El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA podrá disponer la no transferencia de partidas presupuestarias en caso de incumplimiento en el envío de dicha información.

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA garantizará el adecuado funcionamiento de las unidades académicas de Pergamino y Junín, afectando, como mínimo, los recursos necesarios para el mantenimiento de las actuales condiciones de funcionamiento

ARTICULO 14.- Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º inciso a) de la Ley Nº 25.152.

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS deberá presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas.

ARTICULO 15.- Los créditos vigentes del Inciso 1 – Gastos en Personal de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán atender en su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan por aplicación de las normas escalafonarias vigentes. El mayor costo que pueda originarse como consecuencia de modificaciones originadas en el ordenamiento general de la normativa laboral vigente será atendido con afectación a los créditos asignados en la presente ley. El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS queda facultado para disponer las modificaciones presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 16.-Sustitúyese el artículo 62 de la Ley Nº 11.672 – COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) por el siguiente texto:

“ARTICULO 62. Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del Sector Público Nacional, ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente

al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las Autoridades Superiores.

Esta norma no será de aplicación para los casos en que las promociones o aumentos “respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor.”

ARTICULO 17.- Autorízase al TESORO NACIONAL a otorgar préstamos reintegrables al FONDO UNIFICADO creado por el artículo 37 de la Ley Nº 24.065, por un monto de hasta QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 500.000.000) con destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho Fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) mediante el auxilio financiero al FONDO DE ESTABILIZACION creado por Resolución Nº 61 del 29 de abril de 1992 de la ex – SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, dependiente del ex – MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modificatorias y complementarias, en el marco del artículo 36 de la Ley Nº 24.065 y administrado por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A. (CAMMESA), en su calidad de Organismo Encargado del Despacho (OED) conforme el Decreto Nº 1.192 del 10 de julio de 1992. Las sumas efectivamente desembolsadas por el TESORO NACIONAL con destino al Fondo Unificado dada la emergencia energética en que se encuentra el sistema eléctrico serán devueltas a partir del ejercicio 2007 con más la tasa de interés equivalente a aquella que determine el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para sus obligaciones de letras, aplicables al período de vigencia del préstamo. A tal efecto la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS deberá determinar el correspondiente cronograma de devolución y proceder a su comunicación a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, antes del 1º de mayo de 2007, en la medida que se haya dado cumplimiento al objetivo de readaptar el funcionamiento del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM).

ARTICULO 18.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto Nº 145 de fecha 22 de febrero de 2005 por el siguiente texto:

“ARTICULO 2º.- La transferencia de la POLICIA AERONAUTICA NACIONAL dispuesta por el artículo 1º comprende sus competencias, unidades organizativas con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo el personal transferido sus respectivos niveles y grados de revista escalafonarios vigentes a la fecha de la presente medida. Las erogaciones que demande el cumplimiento de los objetivos de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA se atenderán con los

créditos que fije anualmente la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.”

ARTICULO 19.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las atribuciones del artículo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al artículo 5º de la presente ley, incorporará los créditos destinados al funcionamiento del INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA creado por el artículo 13 de la Ley Nº 25.997 en el ámbito de la SECRETARIA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

CAPITULO IV DE LAS NORMAS SOBRE RECURSOS

ARTICULO 20.- Dispónese el ingreso como contribución al TESORO NACIONAL de la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 498.484.000), de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo.

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS establecerá el cronograma de pagos y adecuará la planilla en función de lo dispuesto en el párrafo precedente.

ARTICULO 21.- Fijase en la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 4.850.000) el monto de la tasa regulatoria según lo establecido en el párrafo primero del artículo 26 de la Ley Nº 24.804 - Ley Nacional de la Actividad Nuclear.

ARTICULO 22.- El porcentaje a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de la Ley Nº 25.641 será asignado a partir del presente ejercicio de la siguiente forma: CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4 %) al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA) y el CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1 %) al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA). Estos fondos serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, debiendo ser depositados por ésta directamente a la orden de los organismos mencionados precedentemente en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

ARTICULO 23.- Limitase para el Ejercicio Fiscal 2006 al UNO COMA NOVENTA POR CIENTO (1,90 %) la alícuota establecida por el Inciso a) del artículo 1º del Decreto Nº 1.399 del 4 de noviembre de 2001.

ARTICULO 24.- Suspéndase para el Ejercicio de 2006 la integración correspondiente del FONDO ANTICICLICO FISCAL creado por el artículo 9º de la Ley N° 25.152, con excepción de la afectación de los recursos provenientes de las concesiones en los términos que establece el referido artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento global de la Administración Nacional sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero, el PODER EJECUTIVO NACIONAL destinará al FONDO ANTICICLICO FISCAL el excedente financiero no aplicado.

El Poder Ejecutivo nacional utilizará el referido Fondo para compensar parcialmente la reducción de la recaudación tributaria producto de incrementos en las deducciones del artículo 23 y modificaciones al artículo agregado a continuación del mismo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones y en los artículos 24 y 25 del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales (t.o. 1997) y sus modificaciones.

El Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley, dictará, en materia de su competencia, las normas reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior.

CAPITULO V DE LOS CUPOS FISCALES

ARTICULO 25.- Fíjase el cupo anual a que se refiere el artículo 3º de la Ley N° 22.317 en la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$ 18.000.000). Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar su distribución.

ARTICULO 26.- Fíjase el cupo anual establecido en el artículo 9º, inciso b) de la Ley N° 23.877 en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000).

CAPITULO VI DE LA CANCELACION DE DEUDAS DE ORIGEN PREVISIONAL

ARTICULO 27.- Establécese como límite máximo la suma de CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 404.800.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público a cargo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Se incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho Organismo, cuya cancelación se realiza en efectivo, conforme a la legislación vigente.

La cancelación de deudas a que hace referencia el párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de los respectivos recursos, que para el

presente período fiscal se afectarán observando estrictamente los siguientes órdenes de prelación:

a) Cancelación de deuda consolidada: los recursos se distribuirán entre los acreedores, atendiendo en primer lugar a los de mayor edad y, dentro de este ordenamiento, dando prioridad a los que tengan menores acreencias a cobrar.

b) Cancelación de sentencias judiciales: los recursos se aplicarán según el siguiente orden de prelación:

1) Al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores a 2006 y aún pendientes de pago, respetando estrictamente el orden cronológico de la notificación de las sentencias judiciales. Para igualdad de orden cronológico, se atenderá en primer lugar, la deuda correspondiente a los beneficiarios de mayor edad;

2) Habiéndose cumplimentado la disponibilidad del pago de las sentencias incluidas en el apartado anterior, el crédito presupuestario disponible será aplicado al cumplimiento de las sentencias notificadas en el año 2006, siguiendo igual orden de prelación que el establecido en el apartado precedente.

La cancelación de sentencias conforme a lo dispuesto, se realizará según el orden de prelación que con una periodicidad semestral, sobre la base de las sentencias registradas en cada momento, establezca la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en los meses de enero y julio.

ARTICULO 28.- La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente, así como el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública, será atendida con el monto correspondiente a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL determinado en la planilla anexa al artículo 46 de la presente ley, observándose para su puesta al pago los criterios de prelación dispuestos en el inciso b) del artículo anterior.

Asimismo, se incluye en el Inciso 7 - Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, del Organismo 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social, hasta la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000) para la cancelación de deudas previsionales, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de deuda pública, con Ex Magistrados, Funcionarios y Pensionados del PODER JUDICIAL DE LA NACION.

ARTICULO 29.- Exceptúase del orden de prelación establecido para el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes de beneficiarios previsionales mayores de SETENTA Y OCHO (78) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que ellos o algún miembro de su grupo familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y en un solo pago.

ARTICULO 30.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a implementar un programa general de cancelación de deudas previsionales por reajuste de haberes, relativos a beneficios de leyes anteriores a la Ley N° 24.241. El aludido programa deberá ser de adhesión voluntaria e implicar una deducción en el monto del principal y/o los intereses, que deberá ser proporcional a la etapa procesal en que se encuentre el reclamo administrativo o judicial. Este programa deberá establecer el orden de prelación que regirá el pago de las deudas.

Lo dispuesto precedentemente, deberá realizarse sin que su cumplimiento afecte los procesos de liquidación y puesta al pago de sentencias judiciales firmes de aquellos beneficiarios que no adhieran al referido programa.

ARTICULO 31.- La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos y reajustes por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, será atendida con los montos correspondientes al INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, a la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de la GENDARMERIA NACIONAL y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA determinados en la planilla anexa al artículo 46 de la presente ley.

ARTICULO 32.- Establécese como límite máximo la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$ 79.251.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de acuerdo con el siguiente detalle:

-	INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE	
	RETIROS Y PENSIONES MILITARES:	\$ 10.649.000
-	CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE	
	LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA:	\$ 56.784.000
-	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL:	\$ 1.039.000
-	GENDARMERIA NACIONAL:	\$ 7.779.000
-	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA:	\$ 3.000.000

ARTICULO 33.- Los organismos a que se refieren los artículos 31 y 32 de la presente ley deberán observar estrictamente el orden de

prelación que a continuación se detalla, para la cancelación de las deudas previsionales:

- a) Sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago.
- b) Sentencias notificadas en el año 2006.

En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y, en el segundo, se respetará estrictamente el orden cronológico de la notificación de las sentencias definitivas, conforme el orden de prioridades que con una periodicidad cuatrimestral, sobre las bases de las sentencias registradas en cada momento, establezcan los respectivos organismos descentralizados y servicios administrativos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo.

ARTICULO 34.- Autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a ampliar el límite establecido en la presente ley para la cancelación de sentencias judiciales previsionales correspondientes al régimen previsional público a cargo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL conforme el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera, así como también a ampliar la autorización dispuesta en el artículo 46 para la colocación de Bonos de Consolidación Previsional en la medida en que fuera necesario para el pago de las referidas sentencias judiciales.

ARTICULO 35.- Dispónese que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL deberá atender a partir del año 2006 el servicio de los Bonos de Consolidación Previsionales en circulación colocados para el pago de sentencias judiciales previsionales y deudas previsionales consolidadas.

Autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo.

CAPITULO VII DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES

ARTICULO 36.- Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, referida en los artículos 18 y 19 de la Ley N° 22.919, no podrá ser inferior al CUARENTA Y UNO POR CIENTO (41%) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.

ARTICULO 37.- Prorróganse por DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas en virtud de la Ley N° 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio.

Prorróganse por DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran otorgadas por el artículo 45 de la Ley N° 24.624.

Las pensiones graciabiles prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las Leyes Nos. 23.990, 24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:

- a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a SESENTA MIL PESOS (\$ 60.000).
- b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador otorgante, quedando exceptuados los beneficiarios discapacitados.
- c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a UNA (1) jubilación mínima del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que, la suma total de estos últimos, no supere DOS (2) jubilaciones mínimas del referido sistema.

En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas en relación a sus padres.

En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios.

Las pensiones graciabiles que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la Ley que las otorgó.

Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por el artículo 1° de la presente ley, la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 12.500.000) para la atención de los beneficios mencionados en el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional, que se determinen por la Jurisdicción 01 Programas 16 y 17 y se tramiten y formalicen por la Unidad Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85, para efectivizarse durante el presente ejercicio.

Incrementanse los haberes de las pensiones graciabiles otorgadas por la presente Ley y por las Leyes Nos. 24.764; 24.938; 25.064; 25.237; 25.401 y 25.967, hasta equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado de los Decretos Nros.: 391/2003; 1194/2003; 683/2004; 1199/2004; 748/2005, sus complementarios y modificatorios y/o los que se dispongan en el futuro.

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS deberá efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente.

ARTICULO 38.- Asígnase durante el año 2006 la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 349.200.000) de la contribución destinada al Fondo

Nacional de Empleo (FNE) para la atención de programas de empleo de la Jurisdicción 75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

CAPITULO VIII DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

ARTICULO 39.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley N° 24.156, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada, dentro del plazo de TREINTA (30) días de efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera realizará las operaciones de crédito público que correspondan a la Administración Central.

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y modo establecidos en el primer párrafo.

ARTICULO 40.- Mantiénese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL dispuesto en el Artículo 46 de la Ley N° 25.967 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2005, hasta que el PODER EJECUTIVO NACIONAL declare la finalización del proceso de reestructuración de la misma.

ARTICULO 41.- Exceptúanse del diferimiento de pagos establecido en el artículo precedente a las siguientes obligaciones:

- a) Los servicios financieros de los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Tercera Serie en Dólares Estadounidenses –en los términos del Decreto N° 471 del 8 de marzo de 2002- que estén en poder de sus tenedores originales cuyas tenencias se hayan mantenido sin variación, o por la parte que cumpla con esta condición.
- b) Los servicios financieros de los Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie y los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Moneda Nacional Tercera Serie.
- c) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en virtud de lo dispuesto por los Decretos Nos. 1572 del 1° de Diciembre de 2001 y 1582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:

- I) Que estén en poder de personas físicas de SETENTA Y CINCO (75) años o más de edad, y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la CAJA DE VALORES S.A. al 31 de diciembre de 2001 y que se mantengan sin variación, o por la parte que cumpla con esta condición.
- II) Que estuviesen en poder de personas que atravesen situaciones en las que estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en las que exista un severo compromiso de su salud por el riesgo de incapacidad que presuma la patología y la imposibilidad de postergación del tratamiento por un lapso mayor a DOS (2) años las que serán consideradas individualmente, en el marco del Decreto N° 1310 del 29 de Septiembre de 2004 y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en CAJA DE VALORES S.A. a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Resolución N° 73 del 25 de abril de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA.
- d) Los servicios financieros de aquellos instrumentos emitidos en el marco del Decreto N° 1387 de fecha 1 de noviembre de 2001, posteriormente complementado por los Decretos Nos. 644 de fecha 18 de abril de 2002 y 79 de fecha 13 de enero de 2003.
- e) Los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito.
- f) Los servicios de los préstamos contratados por el Estado nacional con organismos del Sector Público Nacional, no pertenecientes al sistema financiero, que hayan sido destinados al financiamiento de obras de infraestructura.
- g) Los servicios de deuda de la República Argentina con otros países cuando se hayan cedido a fondos, que funcionen en el ámbito de la administración central, destinados a preservar, proteger o administrar los recursos naturales y biológicos.
- h) Las obligaciones del GOBIERNO NACIONAL, derivadas de gastos como comisiones de agencia de registro; agencia fiscal; agente de listado y agente de pago, gastos de bolsa, traducción, legales, de asesoramiento para la negociación de la deuda externa y con organismos multilaterales, de imprenta y agencias calificadoras de riesgo, las que serán analizadas caso por caso en la medida en que sean necesarias para mantener el proceso de negociación y pagos previsto, en las condiciones establecidas en la Resolución del Ministro de Economía y Producción N° 677 del 8 de Octubre de 2004.

ARTICULO 42.- La suspensión dispuesta en el Artículo 1° del Decreto N° 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá hasta que el PODER EJECUTIVO NACIONAL normalice en los términos del artículo 43 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los Decretos mencionados en el Artículo 1° del decreto antes citado. A tal fin, facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a efectuar el dictado de las normas correspondientes.

ARTICULO 43.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 40, inciso b) de la presente ley, en los términos del Artículo 65

de la Ley N° 24.156, y con los límites impuestos por la Ley N° 26.017, quedando facultado el PODER EJECUTIVO NACIONAL para realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del ESTADO NACIONAL en el mediano y largo plazo.

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION informará semestralmente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.

ARTICULO 44.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a negociar la reestructuración de las deudas con acreedores oficiales del exterior que las Provincias le encomienden.

En tales casos el ESTADO NACIONAL podrá convertirse en el deudor o garante frente a los citados acreedores en la medida en que la Jurisdicción Provincial asuma con el ESTADO NACIONAL la deuda resultante en idénticas condiciones a las que éste pacte con los acreedores externos.

A los efectos de la cancelación de las obligaciones asumidas, las Jurisdicciones Provinciales deberán afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios coparticipables, mediante un mecanismo de repago que en ningún caso podrá ser modificado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL o las Jurisdicciones Provinciales participantes.

Asimismo el ESTADO NACIONAL podrá coordinar las acciones tendientes a la reestructuración de la deuda externa de las Jurisdicciones Provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de las mismas.

ARTICULO 45.- Las obligaciones consolidadas en los términos de la Ley N° 23.982 a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las Leyes Nos. 25.344, 25.565 y 25.725 y las que su cancelación se hace efectiva mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado hasta el 31 de diciembre de 2001, serán atendidas mediante la entrega de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2 % y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Moneda Nacional Tercera Serie 2 %, según lo que en cada caso corresponda.

Las obligaciones consolidadas en los términos de la Ley N° 23.982 a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las Leyes Nos. 25.344, 25.565 y 25.725, y las que su cancelación se hace efectiva mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán canceladas mediante la entrega de los Bonos de Consolidación Sexta Serie y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Cuarta Serie, según lo que en cada caso corresponda.

Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos anteriores a las obligaciones comprendidas en las Leyes Nos. 24.411, 24.043 y 25.192 las que continuarán siendo canceladas mediante la entrega de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie 2 %.

La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la Ley N° 25.565 y los artículos 38 y 58 de la Ley N° 25.725, resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999, y anterior al 1° de enero de 2002 o al 1° de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda. Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a que se refiere el artículo 13 de la Ley N° 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes. En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1° de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la Ley N° 23.928, en el 1° de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la Ley N° 25.344, y en el 1° de enero de 2002 o el 1° de septiembre de 2002, para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la Ley N° 25.565 y la Ley N° 25.725.

ARTICULO 46.- Fíjase en DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.900.000.000) el importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la Ley N° 25.152, las alcanzadas por el Decreto N° 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 17 de la Ley N° 25.967, incorporado a la Ley N° 11.672 – COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005), por los importes que en cada caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.

Las colocaciones serán efectuadas en el estricto orden cronológico de ingreso a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de los formularios de requerimiento de pago que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación hasta agotar el importe máximo de colocación fijado por el presente artículo.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a realizar modificaciones dentro del monto total a que se refiere la citada planilla.

ARTICULO 47.- Fíjanse en la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$ 4.000.000.000) y en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 500.000.000) los montos máximos de autorización a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, respectivamente, para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Ley N° 24.156.

ARTICULO 48.- La SECRETARIA DE HACIENDA podrá solicitar al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA adelantos transitorios en el marco de las disposiciones del artículo 20, sustituido

por el artículo 15 de la Ley N° 25.780, de la Carta Orgánica del citado Organismo.

ARTICULO 49.- Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública se incluye la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$ 18.000.000) destinada a la atención de las deudas referidas en los incisos b) y c) del artículo 7° de la Ley N° 23.982.

CAPITULO IX OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 50.- Ratifícanse los Decretos Nos. 493 del 20 de abril de 2004, 528 del 28 de abril de 2004, 1.898 del 22 de diciembre de 2004, 2.007 del 29 de diciembre de 2004, 540 del 30 de mayo de 2005, 977 del 18 de agosto de 2005 y 1.047 del 31 de agosto de 2005.

ARTICULO 51.- Dase por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de todo Ente, Organismo, Instituto, Sociedad o Empresa del Estado que se encuentre en proceso de liquidación de acuerdo con los Decretos Nos. 2.148 de fecha 19 de octubre de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.

Establécese como fecha límite para la liquidación definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de 2006 o hasta que se produzca la liquidación definitiva de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados en la presente prórroga, por medio de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION que así lo disponga, lo que ocurra primero.

ARTICULO 52.- Extiéndense las previsiones del artículo 1° del Decreto N° 1.733 de fecha 9 de diciembre de 2004, ratificado por el artículo 7° de la Ley N° 26.017, a los títulos públicos provinciales que cuenten con la autorización prevista en el artículo 25 y al ejercicio de las facultades conferidas por el primer párrafo del artículo 26 ambos de la Ley N° 25.917.

ARTICULO 53.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.156 por el siguiente texto: “En el contexto de esta Ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades:

a) Institucionales

- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional

b) Administrativo-Financieras

- Servicio de la Deuda Pública
- Obligaciones a cargo del Tesoro

ARTICULO 54.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas. El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá establecer las características y condiciones para ser considerados como tales.

ARTICULO 55.- Fíjanse los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio, a las Provincias que se determinan seguidamente, en concepto de pago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del Acuerdo Nación - Provincias, sobre Relaciones Financieras y Bases para un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27 de febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, y que se corresponde con el TRECE POR CIENTO (13 %) a la garantía de coparticipación federal de impuestos establecida en el Compromiso Federal ratificado por ley 25.400 y sus addendas complementarias: a la PROVINCIA DE LA PAMPA, TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$ 3.369.100); a la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$ 3.380.000); a la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, SEIS MILLONES

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 6.795.000); a la PROVINCIA DE SANTA FE, CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIEN PESOS (\$ 14.970.100) y a la PROVINCIA DE SAN LUIS, CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 4.031.300).

ARTICULO 56.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10º de la presente ley, disponga una ampliación en el crédito asignado al PROGRAMA 16 – FOMENTO E IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DEMOCRATICO - JURISDICCION 30- MINISTERIO DEL INTERIOR, en la suma de UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000) para cubrir los gastos e inversiones que demande el cumplimiento de las actividades de la CONFERENCIA PERMANENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE – COPPPAL- .

ARTICULO 57.- Constitúyese, dentro del total de los créditos aprobados por la presente ley, un Fondo Nacional Complementario de los programas vigentes en otras jurisdicciones, para ayuda a estudiantes de nivel medio, secundario, terciario y universitario, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 3.275.000) que serán asignados al Programa 17 de la JURISDICCION 01, encargado de la instrumentación y aplicación del fondo creado.

ARTICULO 58.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del articulo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al articulo 5º de la presente ley, asignará al Programa 17 de la JURISDICCION 01, la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 5.895.000) para el cumplimiento de programas destinados a personas de existencia ideal con personería jurídica y sin fines de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.

ARTICULO 59.- Autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las facultades del artículo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al artículo 5º de la presente ley, asigne la suma UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000) al Hogar San Antonio Asociación “Pan de los Pobres de San Antonio” – Personería Jurídica Decreto 374/1900- de la Ciudad de San Salvador de Jujuy y la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3.000.000) con destino a la Entidad 111- Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objeto de otorgar aportes no reintegrables por UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 1.500.000) a la Fundación Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan; y por UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 1.500.000) para distribuir entre entidades civiles sin fines de lucro dedicadas a la contención de niños y adolescentes con tutela judicial.

ARTICULO 60.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO para el financiamiento del Programa de Desarrollo e Integración del Norte Grande y al incorporar el referido préstamo en uso de las facultades del artículo 8º, asignará mediante compensación de créditos, las sumas necesarias correspondientes a la contrapartida local del citado préstamo.

ARTICULO 61.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el BANCO MUNDIAL para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al incorporar el referido préstamo en uso de las facultades del artículo 8º, asignará mediante compensación de créditos, las sumas necesarias correspondientes a la contrapartida local del citado préstamo.

ARTICULO 62.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del artículo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al artículo 5º de la presente ley,

asignará a la JURISDICCION 01 con destino al Inciso 1, las sumas que a continuación se detallan para los programas que seguidamente se indican: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 9.800.000) para el Programa 16; DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 10.000.000) para el Programa 17; TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 3.500.000) para el Programa 18; UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 1.500.000) para el Programa 19 y la suma de UN MILLON CIEN MIL PESOS (\$ 1.100.000) para el Programa 20, cuya financiación durante el ejercicio 2005 fue atendida mediante la incorporación de sobrantes de ejercicios anteriores.

ARTICULO 63.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del articulo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al articulo 5º de la presente ley, asignará al Programa 18 – Asistencia Bibliográfica - de la JURISDICCION 01, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 250.000), para ser destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de la Comisión Ejecutora de la Ley 25.114.

ARTICULO 64.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), el Jefe de Gabinete de Ministros, a requerimiento de los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, incorporará los remanentes de los presupuestos de la JURISDICCION 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL, existentes al cierre de cada ejercicio fiscal para atender programas sociales, necesidades adicionales de funcionamiento y bienes de uso del Poder Legislativo Nacional. Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en su percepción como en su utilización, los importes de las becas y subsidios otorgados por la Jurisdicción 01 en el ejercicio 2005.

ARTICULO 65.- Dispónese dentro de los créditos aprobados por la presente ley, la asignación de una partida de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 300.000) para la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO - JURISDICCION 35 – para ser destinada a la COMISION BINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ALTA CUENCA DEL RIO BERMEJO Y RIO GRANDE DE TARIJA, a fin de atender el aporte que deben hacer los Gobiernos participantes, conforme al acuerdo celebrado entre la REPUBLICA ARGENTINA y LA REPUBLICA DE BOLIVIA, denominado "Acuerdo de Orán", que fuera ratificado por la Ley N° 24.639.-

ARTICULO 66.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del articulo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al articulo 5º de la presente ley, asignará al Programa 17 – Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios - de la JURISDICCION 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR, la suma de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000), para ser destinada a la FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS –F.A.M.- en carácter de aporte no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento del citado organismo.

ARTICULO 67: Modifícase el segundo párrafo del Artículo 15 de la Ley N° 24.156, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros a que se refiere el presente artículo caducarán al cierre del ejercicio fiscal siguiente de aquel para el cual se hayan aprobado, en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, mediante la documentación que corresponda, la contratación de las obras y/o la adquisición de los bienes y servicios autorizados.”

ARTICULO 68.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del articulo 10, asignará a la JURISDICCION 01 – , la suma de UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000) para atender los gastos que demande la COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LA EMERGENCIA PUBLICA Y REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO, creada por la Ley N° 25.561.

ARTICULO 69: Autorizada la ejecución de una obra de suministro de gas natural a usuarios actualmente abastecidos con gas propano indiluido por redes, conforme lo prescribe el Artículo 2º de la Ley Nº 26.079, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS deberá proceder a asignar a los Fondos Fiduciarios que con dicho objeto se creen o se hayan creado, los recursos presupuestarios necesarios para afectar al pago del capital invertido en las obras que posibiliten tal sustitución, el monto anual total que surge para ese volumen y cantidad de calorías por la diferencia entre el precio de mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y los PESOS TRESCIENTOS (\$ 300) por tonelada métrica fijado en el Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano para Redes de Distribución de Gas Propano Indiluido, ratificado por el decreto Nº 934/2003 y sus normas complementarias o entre aquel y el precio que determine la autoridad de aplicación en el futuro.

ARTICULO 70.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las reasignaciones presupuestarias necesarias que permitan la provisión de asistencia técnica y material ferroviario, en el marco de los acuerdos bilaterales suscriptos a tales efectos, entre la REPUBLICA ARGENTINA y el REINO DE ESPAÑA, la REPUBLICA DE PORTUGAL y la REPUBLICA POPULAR CHINA.

ARTICULO 71.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a disponer ampliaciones de los créditos presupuestarios de la JURISDICCIÓN 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en la medida que se verifique la mayor recaudación de los recursos del FONDO NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA y los que se corresponden al FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIOR, provenientes de la Ley 23.966.

ARTICULO 72.- El Organismo Descentralizado Nº 611 consignado en las Planillas Anexas de la presente Ley como "Organismo Nacional

de Control Comercial y Agropecuario” deberá, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en su Decreto de creación N° 1067 de fecha 31 de agosto de 2005, considerarse como “OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO”.

ARTICULO 73.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a incrementar, en oportunidad de proceder a la distribución de los créditos a que alude el Artículo 5º, la estimación de los recursos propios correspondientes a la “OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO” hasta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) y proceder a su distribución en las distintas partidas de gastos.

ARTICULO 74.- EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del Artículo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al Artículo 5º de la presente Ley, asignará en la Jurisdicción 91 Obligación a Cargo del Tesoro la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000) destinada al apoyo al sector tambero de acuerdo con la Resolución N° 406 de fecha 25 de julio de 2005 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

ARTICULO 75.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10 de la presente ley, disponga una ampliación en el crédito asignado al Programa 17 – Transporte Aéreo de Fomento – Jurisdicción 45 – Subjurisdicción 23 – Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, de TRECE MILLONES DE PESOS (\$ 13.000.000) para atender a las necesidades presupuestarias de la empresa Líneas Aéreas del Estado – LADE – y para requerimientos operativos de la misma.

ARTICULO 76.- Prorrógase durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del producido de los tributos

prevista en las Leyes Nos. 24.977, 25.067 y sus modificatorias, Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias), 24.130, 23.966 (t.o. 1997 y sus modificatorias), 24.464 – artículo 5º -, 24.699 y modificatorias, 25.226 y modificatorias y 25.239 – artículo 11 -, modificatoria de la Ley Nº 24.625, y prorróganse por cinco años los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley Nº 25.239.

ARTICULO 77.- El Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades del artículo 10, asignará en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Producción, la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$ 150.000) para atender los gastos que demande el pago de la membresía para la incorporación de la República Argentina al Consejo Oleícola Internacional.

CAPITULO X

DE LA LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE

ARTICULO 78.- Incorpóranse a la Ley Nº 11.672 – COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) los artículos 51, 55 y 60 de la Ley Nº 25.967 y el primer párrafo del artículo 35 y los artículos 52 y 69 de la presente ley.

TITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

ARTICULO 79.- Detállanse en las planillas resumen Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente Título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.

TITULO III

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 80.- Detállanse en las planillas resumen Nº. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente Título los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.

ARTICULO 81.- Detállanse en las planillas resumen N° 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente Título los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.

ARTICULO 82.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Alberto E. Balestrini.

Enrique R. Hidalgo.

ACLARACION: El antecedente de la Sanción de la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al mensaje 597 de fecha 12 de septiembre de 2005.-